V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI MONTEVIDÉU – URUGUAI

ACESSO À JUSTIÇA

JOSÉ QUERINO TAVARES NETO

HENRY JAVIER TRUJILLO AROCENA

Copyright © 2016 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito

Todos os direitos reservados e protegidos.
Nenhuma parte deste livro poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI
Presidente - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa – UNICAP
Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet – PUC - RS
Vice-presidente Sudeste - Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim – UCAM
Vice-presidente Nordeste - Profa. Dra. Maria dos Remédios Fontes Silva – UFRN
Vice-presidente Norte/Centro - Profa. Dra. Julia Maurmann Ximenes – IDP
Secretário Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba – UFSC
Secretário Adjunto - Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto – Mackenzie

Representante Discente – Doutoranda Vivian de Almeida Gregori Torres – USP

Conselho Fiscal:
Prof. Msc. Caio Augusto Souza Lara – ESDH
Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – UFG/PUC PR
Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches – UNINOVE
Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva – UFS (suplente)
Prof. Dr. Fernando Antonio de Carvalho Dantas – UFG (suplente)

Secretarias:
Relações Institucionais – Ministro José Barroso Filho – IDP
Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho – UPF
Educação Jurídica – Prof. Dr. Horácio Wanderlei Rodrigues – IMED/ABEDi
Eventos – Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta – FUMEC
Prof. Dr. Jose Luiz Quadros de Magalhaes – UFMG
Profa. Dra. Monica Herman Salem Caggiano – USP
Prof. Dr. Valter Moura do Carmo – UNIMAR
Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr – UNICURITIBA
Comunicação – Prof. Dr. Matheus Felipe de Castro – UNOESC

A174
Acesso à Justiça [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI/UdelaR/Unisinos/URI/UFSM/Univali/UPF/FURG;

Coordenadores: Henry Javier Trujillo Arocena, José Querino Tavares Neto – Florianópolis: CONPEDI, 2016.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-5505-215-6
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: Instituciones y desarrollo en la hora actual de América Latina.

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Interncionais. 2. Justiça. I. Encontro Internacional do CONPEDI (5. : 2016 : Montevidéu, URU).

CDU: 34



Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito
Florianópolis – Santa Catarina – Brasil
www.conpedi.org.br



Universidad de la República
Montevideo – Uruguay
www.fder.edu.uy

V ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI MONTEVIDÉU – URUGUAI

ACESSO À JUSTIÇA

Apresentação

En las presentaciones realizadas se puede ver análisis que recorren distintos niveles de temas dentro del concepto de acceso a la justicia. De manera general, se pueden distinguir cuatro aspectos que han motivado el trabajo de los ponentes. Un aspecto que se podría llamar "procesal" refiere a los institutos procesales disponibles dentro del Poder Judicial y dentro del sistema institucional como un todo. Básicamente, éstos refieren a diferentes tipos: los mecanismos alternativos tales como el arbitraje, conciliación y mediación; los juzgados especiales, y los institutos de acción colectiva o de público interés. Quienes expusieron sobre estos temas estaban preocupados sobre todo por la eficiencia y eficacia de estos instrumentos procesales, particularmente los primeros –la mayoría de los trabajos refirió a ellos- debido principalmente a la reciente entrada en vigencia del Código del Proceso Civil en Brasil (CPC) que ha incluido innovaciones en los procedimientos de conciliación y mediación, en busca de facilitar la entrada al sistema legal por parte, especialmente, de aquellas personas y grupos más vulnerables. Los mecanismos de autocomposición son vistos como una forma prometedora de enfrentar el crecimiento y complejidad de las demandas que enfrenta el Poder Judicial. En general, estos trabajos concluyen que estas herramientas son un avance, aunque todavía insuficientes.

Un segundo tipo lo constituyen las acciones colectivas, incluyendo acciones de masa. También aquí el CPC incluye innovaciones cuyo efecto se verá en el futuro, y también aquí quienes abordan el tema observan limitaciones en el diseño del instituto. El tercer tipo, dado por los juzgados especiales, ha sido objeto de un trabajo que también observa el funcionamiento de la Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), encontrando que ha adoptado formas novedosas de unificación de jurisprudencia y de generación de parámetros de actuación, facilitando soluciones más próximas a las necesidades de los justiciables y también más rápidas.

Más allá de los instrumentos procesales, un trabajo tomó en cuenta el papel de las Defensorías públicas como mecanismo de acceso a la justicia, especialmente para personas más vulnerables. Se encuentra que, a pesar de la existencia de recomendaciones internacionales sobre la necesidad de este mecanismo, y de que estas fueron incorporadas en

la Constitución, la implementación de la institución es deficiente en buena medida, teniendo cobertura solo en una fracción del territorio, y con problemas de funcionamiento en muchas partes.

De hecho, los problemas de calidad del diseño y la implementación de instrumentos procesales, y de los propios organismos con funciones en el acceso a la justicia, son observados reiteradamente por los ponentes. Se señala justamente que el acceso no puede reducirse solo a la admisión en el proceso, sino que incluye también el modo de ser del proceso, la justicia del resultado y su utilidad. Los distintos trabajos sugieren que la promulgación de disposiciones legales es un paso adelante, pero notoriamente insuficiente si no es acompañada de otros procesos de cambio. Todo esto lleva a complejizar el concepto de acceso a la justicia, complejización que refleja la de la sociedad que demanda ese acceso, que según ven varios de los ponentes se ha vuelto más diferenciada y múltiple.

En este sentido, un trabajo se apoya en la teoría de los juegos para aludir a la existencia de ciertas formas de cultura legal que tienden a identificar acceso a la justicia como acceso a un litigio que, en tanto conflicto, solo puede ser resuelto por adjudicación, aplicando la fuerza del Estado. En cambio, los modelos de autocomposición presuponen la posibilidad de comportamiento cooperativo, que resulta difícil de conciliar con el paradigma imperante.

Finalmente, dos trabajos se han referido a los temas planteados por los enfoques neo constitucionalistas. Uno de ellos analiza los dilemas distributivos que se plantean frente a la actuación del Poder Judicial en el acceso a medicamentos y servicios médicos de alto costo, proponiendo la aplicación de la teoría de la justicia de Rawls como forma de decidir la asignación de recursos escasos frente a la judicialización de estas demandas. El otro trabajo explora la inobservancia de disposiciones positivas, especialmente de la audiencia preliminar, desde la perspectiva de Luigi Ferrajoli.

De hecho, el GT propuesto Acceso a la Justicia afirma cada vez más como un espacio de discusión no sólo de acceso a los tribunales como una herramienta para producir la justicia, que no pocas veces produce exactamente lo contrario, pero, sobre todo, la construcción la ciudadanía y la necesidad de aumentar las oportunidades de acceso a los sistemas de justicia. Esto sólo será efectiva como cuando el monopolio de decir lo que es correcto para migrar a una mayor comprensión de lo que es correcto y por lo tanto no sólo ellos mismos tienen que cambiar las fuentes tradicionales del derecho, tales como, en particular, la expansión de los actores inherente a la toma de decisiones y constructivo proceso de su fuente más recurrente, la ley.

Montevidéu

Prof. Dr. Henry Trujillo - UDELAR

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG/PUCPR

DEFENSORIA PÚBLICA NA DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS EM ESPECIAL DAS PESSOAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE COMO MEIO EFICAZ DE EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA: AS BARREIRAS AO EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA.

PUBLIC DEFENDER IN DEFENCE OF HUMAN RIGHTS IN SPECIAL PEOPLE IN CONDITION OF VULNERABILITY AS THROUGH EFFECTIVE ACCESS TO JUSTICE : BARRIERS TO EFFECTIVE ACCESS TO JUSTICE.

Grazielle Mendes Martins [1]
Lucas Carvalho Américo [2]

Resumo

Por intermédio do presente trabalho pretende-se analisar o papel da Defensoria Pública na defesa dos direitos humanos tratando em especial das pessoas em condição de vulnerabilidade. Diversos mecanismos presentes no sistema Interamericano e nacional tem por objetivo central o fortalecimento da Defensoria Pública a fim de uma efetiva proteção e concreção de direitos humanos. Constatou-se que apesar da vasta gama de medidas que visam seu fortalecimento no plano teórico, a análise empírica demonstra que o efetivo acesso dos necessitados, principalmente daqueles em condições de vulnerabilidade, torna demasiadamente mitigado em virtude de problemas estruturais da Defensoria Pública no Estado Brasileiro.

Palavras-chave: Defensoria pública, Direitos humanos, Acesso à justiça, Vulneráveis

Abstract/Resumen/Résumé

The present research to analyze the function of the Public Defender in defense of the human rights dealing with vulnerable people. Several mechanisms in the Inter American system and national have the central object the fortification of the Public Defense in order to an effective protection and concretion of the human rights. It was found that despite the wide range of measures to strengthen the theoretical level the empirical analysis that the effective access of the needy people specially for those who have a vulnerable condition becomes too mitigate due to structural problems of the Public Defense in the Brazilian.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Public defense, Human rights, Access to justice, Vulnerable

[1] Advogada, Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Mians gerais,Pós Graduanda em Direito de Família e Direito Processual Civil, Mestranda em Proteção dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Itaúna.

[2] Advogado, Graduado em Direito pela Universidade de Itaúna, Mestrando em Proteção dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Itaúna.

INTRODUÇÃO

A proteção dos direitos humanos deve ser entendida como fundamento básico dos Estados, que devem atuar de forma a efetivar e maximizar esses direitos. Nesse sentido, o debate acerca da forma de se efetivar esses direitos e garantir o acesso à justiça mostra-se cada vez mais relevante na ordem jurídica dos Estados.

Partindo dessa premissa, observa-se que pessoas em condição de vulnerabilidade são aqueles que encontram maior dificuldade em garantir seus direitos fundamentais e ter acesso à justiça. É nesse cenário que instituições como a Defensoria Pública se insere, ou seja, atuar na prevenção, promoção e na defesa dos direitos humanos a todos aqueles que assim necessitem, incluindo nesse bojo as pessoas em condição de vulnerabilidade dada sua fragilidade em meio as nuances da sociedade.

Urge destacar que vários mecanismos internacionais e nacionais conferem o fortalecimento da Defensoria Pública, permitindo a concretização dos direitos humanos por intermédio de sua atuação.

Não resta dúvidas, que no campo teórico, o papel da Defensoria Pública é de suma importância sendo a instituição essencial ao sistema de Justiça pátrio, encarregada da orientação e defesa das pessoas necessitadas.

Contudo, em pesquisa realizada em conjunto entre a Associação Nacional dos Defensores Públicos e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revela um quadro alarmante no que diz respeito a estruturação e a presença da Defensoria Pública no território nacional o que, consequentemente, leva a barreiras ao acesso à justiça e a mitigação de direitos humanos daqueles que necessitam da atuação da Defensoria em prestar assistência jurídica e de atuar de forma a concretizar direitos constitucionalmente previstos.

I – A DEFENSORIA PÚBLICA E OS MECANISMOS DE ACESSO À JUSTIÇA NO SISTEMA INTERAMERICANO NA PROTEÇÃO DOS VULNERÁVEIS.

Ab initio, urge destacar o conceito de pessoas em situação de vulnerabilidade e para tanto, faz-se necessário, delimitar também o conceito de minorias tendo em vista a frequente confusão entre os dois termos.

Cumpre então salientar os ensinamentos de Fábio Comparato[1] que aponta quatro critérios conceituais de natureza objetiva, para o reconhecimento de uma minoria populacional, dos quais vejamos:

> "O primeiro critério corresponde à existência de diferenças étnicas, religiosas ou linguísticas em relação ao restante da população. O segundo critério classifica em ordem numérica, tais grupos não devem constituir a maioria da população. Em terceiro lugar, a noção de minoria discriminada pressupõe o fato político de que tais grupos não se encontram em situação de poder na sociedade. E em quarto e último critério, a discriminação violadora desse direito humano supõe que discriminadores e discriminados pertencem ao mesmo Estado"

Já o que diz respeito à conceituação de grupos vulneráveis, Elida Séguim[2] estabelece critérios que diferenciam esses grupos das minorias, eis que *"se apresentam, por vezes, como grande contingente, sendo exemplo disso, as mulheres, as crianças e os idosos"* afirma ainda que os grupos de minorias *"são destituídos de poder"*, entretanto, *"mantém a cidadania"* e*, "acima de tudo, não têm consciência de que estão sendo vítimas de discriminação e desrespeito",* ou seja*, "não sabem que têm direitos".*

Nesse ínterim, pode-se classificar como grupos vulneráveis, grupos da sociedade que enfrentam situações de exclusão das mais diversas formas como, v.g., questões relacionadas a gênero, opção sexual, incapacidade física ou mental, etnia, religião, raça, e etc.

O acesso desses grupos são dificultados social, material e psicologicamente, o que resulta diretamente na dificuldade ou mitigação da concreção de direitos fundamentais, ou seja, há reflexos no que diz respeito ao acesso a direitos e garantias fundamentais, a políticas sociais, a bens e serviços, sendo que, muitas vezes, esses grupos estão inseridos num contexto de minorias, o que aumenta o grau de complexidade da situação fática.

Partindo dessa afirmação é certo concluir que sejam grupos vulneráveis ou minorias, o grau de relevância do papel da Defensoria Pública na defesa dos direitos e garantias fundamentais é de equivalência, portanto, assegurar o acesso à justiça desses grupos mostra-se fundamentalmente imprescindível no processo de transformação social, na concretização e no fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

§1° - MECANISMOS DE ACESSO À JUSTIÇA

---

[1] COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pag. 319.

[2] SÉGUIN, Elida. *Minorias e grupos vulneráveis:* uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

Os mecanismos de acesso à justiça partem de duas diretrizes básicas: assegurar o acesso à justiça a pessoas em condição de vulnerabilidade e de medidas que venham a fortalecer a instituição Defensória Pública que atuará na defesa desse grupo.

Nessa toada, várias medidas em âmbito interamericano existem e tem como objetivo assegurar o acesso de vulneráveis a justiça, ou a otimização deste acesso de forma efetiva. Veremos algumas delas em seguida.

A - As 100 regras de Brasília.

O primeiro mecanismo que destacou a importância do tema em tela foi *"As 100 regras de Brasília sobre acesso à justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade"*, onde foram desenvolvidos os princípios estabelecidos na "*Carta de Direitos das Pessoas perante a Justiça no Espaço Judicial Ibero-Americano"*, aprovadas na XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana, em março de 2008.

Nesse documento reconheceu-se a necessidade do sistema normativo configurar-se de modo a servir de instrumento para a defesa efetiva dos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Afirma que cabe ao Estado não apenas reconhecer ao cidadão um direito, mas também garantir sua tutela de forma efetiva ao ordenamento jurídico, não devendo, portanto, encontrar dificuldade de obter essa tutela. Destaca ainda que aqueles em condição de vulnerabilidade são os que encontram maior óbice no exercícios desses direitos, o que claramente dificulta a efetiva eficácia de direitos humanos.

Nesse prisma, a Cúpula Judicial Ibero-Americana recomendou a todos os poderes públicos, que promovessem, dentro de seu âmbito de competência, reformas legislativas e medidas que tornassem efetivos o conteúdo dessas regras, no intuito de melhoria efetiva de acesso a justiça.

B – O papel do Defensor Interamericano.

Outro mecanismo que busca assegurar o efetivo acesso à justiça diz respeito ao Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos que dispõe, em seu artigo 37, a figura do "defensor interamericano". Sua designação é realizada pela Corte Interamericana de Direitos humanos em situações em que a vítima não possui representação legal devidamente credenciada.

Em se tratando de pessoas em situação de vulnerabilidade que tenha sofrido violação de direitos humanos sem condições de arcar com os custos de um defensor qualificado para atuar na presente demanda, passa a ser então representada pela Associação Interamericana de Defensorias Públicas.

§2° - RESOLUÇÕES DA OEA E O FORTALECIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Partindo da premissa já apresentada, importante destacar a relevância das resoluções da Organização dos Estados Americanos como importante fonte de fortalecimento das Defensorias Públicas.

Na busca de soluções efetivas para o problema de acesso a justiça, concretização de direitos fundamentais e o papel da Defensoria Pública, quatro resoluções que tratam desses temas foram aprovadas e produziram efeitos diretos na ordem jurídica interna. Façamos então um apanhado geral de cada uma delas em seguida:

A - Resolução AG/RES 2656 (XLI-0/11) da OEA: ponto de partida para o fortalecimento da Defensoria Pública.

A Resolução AG/RES. 2656 (XLI-0/11), com o título "Garantias para o acesso à Justiça. O papel dos defensores oficiais" foi aprovada pela OEA durante a sua 41ª Assembléia Geral, realizada no período de 5 a 7 de junho, em San Salvador, República de El Salvador.

Em linhas gerais a AG/RES. 2656 (XLI-0/11) pode ser considerada a mais relevante sobre o tema, fomentando o papel da Defensoria Pública a outro patamar, propiciando-a garantir o acesso à justiça a pessoas em condição de vulnerabilidade, necessidade ou hipossuficiência. Em outros termos, foi o documento que reconheceu o acesso à justiça como um direito autônomo daqueles que tenham direitos fundamentais violados.

Vale destacar ainda que a OEA trouxe, no texto da resolução supramencionada, duas recomendações importantes: Os Estados-membros que por ventura não houvessem criado o órgão Defensoria Pública em seu território deveriam considerar a possibilidade de instituí-la e aqueles que já à tivessem criado, deveriam adotar medidas que viessem a garantir autonomia e independência funcional da instituição e de seus membros.

Vale destacar o acordo de entendimento entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF), pois, através deste, foi possibilitado pela resolução em comento, que as vítimas de violações de direitos

humanos que não possam arcar com os custos de um defensor habilitado, terão seu direito assegurado à assistência gratuita por meio dos Defensores Públicos Interamericanos designados pela Corte IDH.

Nesse prisma, cabe à Defensoria Pública, v.g., apresentar denúncia à Comissão Interamericana ou encaminhar petição à Comissão relatando potencial violação a direitos humanos caso o ordenamento interno não seja capaz de solucionar violações a direitos fundamentais.

Portanto, há legitimidade da Defensoria Pública de postular perante os organismos internacionais competentes em razão da instituição ter como missão a promoção e a defesa de direitos humanos, assim, no caso de violações a esses direitos, deverá efetivá-los[3].

Urge destacar que foi a partir da recomendação proposta pela OEA que o Congresso Nacional inseriu o §4° ao artigo 134 da Constituição Federal que consagrou expressamente os princípios da Defensoria Pública, quais sejam: a indivisibilidade, unidade e independência funcional, ao texto Constitucional que fortaleceu a instituição, qualificando seus membros como agentes de transformação social, tema esse que será abordado mais adiante.

B – Resolução AG/RES 2714 (XLII-O/12), Resolução AG/RES. 2801 (XLIII-O/13) e Resolução AG/RES 2821 (XLIV-O/14): aspectos complementares.

No que tange as resoluções da OEA necessário destacar ainda as resoluções 2.714 (XLII-O/12), 2.801 (XLIII-0/13) e 2.821 (XLIV-0/14) que abordam o tema das Defensorias Públicas com o intuito de fortalecer a instituição dentro do ordenamento jurídico de seus Estados-membros.

Pode-se concluir que possuem teor normativo complementar a resolução AG/RES. 2656 (XLI-0/11), tendo em vista que visam fortalecer as recomendações já feitas, contudo trazem em seus textos algumas inovações importantes.

O conteúdo da Resolução AG/RES. 2714 (XLII-O/12) veio cobrar maior empenho dos Estados-membros no cumprimento das recomendações da resolução AG/RES.

[3] RIBEIRO, Roberta Solis. Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e Defensoria Pública. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (coord.). A Defensoria Pública e os Processos Coletivos: comemorando a Lei Federal 11.448, de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 292.

2656 (XLI-0/11), ou seja, que assegurem o livre e pleno acesso à Justiça às pessoas em condição de vulnerabilidade, bem como destacou a importância da implementação de iniciativas para garantir a independência e autonomia funcional da Defensoria Pública.

Como novidade, contestou a delegação do serviço de assistência jurídica gratuita à iniciativa privada. Esse ponto especifico, teve reflexos diretos na ordem jurídica interna quando o Supremo Tribunal Federal, em decisão no mesmo ano da convenção (2012), declarou inconstitucional a prática de realização de convênios celebrados entre advogados, que prestam serviços de caráter privado, e que atendiam a população carente, e a Ordem dos Advogados do Brasil de alguns Estados, que remuneravam os profissionais.

Repetindo as recomendações descritas na resolução de 2011, a resolução AG/RES. 2656 (XLI-0/11) reiterou em seu texto, a importância de se assegurar a Defensoria Pública autonomia funcional e independência, contudo, foi além e ressaltou a importância da autonomia financeira e/ou orçamentária e técnica.

Nesse sentido, a OEA encoraja que essas medidas sejam implementadas, destacando a sua importância como parte dos esforços dos Estados-membros em garantir um serviço público eficiente, livre de ingerências e controles indevidos por parte de outros poderes do Estado, e ainda estimula aos Estados promoverem a participação dos Defensores Públicos oficiais no Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, a fim de que o direito de defesa técnica seja exercido e garantido em plano nacional e internacional.

Um ano mais tarde, a Organização dos Estados Americanos deu mais um importante passo em prol do fortalecimento da Defensoria Pública, aprovando a Resolução AG/RES. 2821 (XLIV-O/14). O documento intitulado “Rumo à autonomia e ao fortalecimento da Defensoria Pública Oficial para garantir o acesso à justiça” visa aprofundar o compromisso dos Estados-membros e também normatizar o trabalho dos defensores na proteção dos direitos humanos. O documento foi aprovado durante o 44º Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, que ocorreu no Paraguai, de 3 a 5 de junho de 2014.

O ponto central da nova resolução é fortalecer os instrumentos normativos que abordam o tema do Acesso à Justiça como um direito autônomo salientando que o acesso à justiça não se consagra de forma efetiva com o ingresso das pessoas em condição de vulnerabilidade na instância judicial, mas, sim, deve ser concretizado ao longo de todo o

processo, o que demonstra a importância da Defensoria Pública no plano de efetivação de direitos humanos.

Por fim, destacou o relevante debate no que diz respeito ao fortalecimento de instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos como aqueles referentes ao combate a tortura e proteção de grupos vulneráveis a fim de maximizar o acesso à justiça a grupos nessas condições.

II – AS ATRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA EM ÂMBITO NACIONAL E AS BARREIRAS AO ACESSO A JUSTIÇA.

No que tange a Defensoria Pública no plano nacional, o direito de acesso à justiça aos hipossuficientes (nesse contexto o termo hipossuficiente é mais abrangente que o termo vulneráveis, contudo este integra o conceito daquele para efeitos de proteção e atuação da Defensoria Pública na defesa de direitos fundamentais) foi elevado a nível Constitucional tendo como missão atuar na defesa dos direitos humanos e de prestar orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, , assim considerados na forma do artigo 5°, inciso LXXIV da Lei Maior de 1988, desde o advento da Lei Complementar nº 132/09, que alterou dispositivos da Lei Complementar nº 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e que prescreve normas gerais para sua organização, sendo, portanto, essencial à função jurisdicional do Estado, essencial à própria Justiça, como preceitua o art. 134 da Constituição da República.

Ante o exposto, importante trazer a definição do termo acesso à justiça que como afirmam Mauro Cappelletti e Bryant Garth, não possui fácil definição, contudo delimitam duas finalidade básicas do sistema jurídico, quais sejam "*o sistema jurídico pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado, devendo ser igualmente acessível a todos e produzir resultados que sejam individual e socialmente justos*"[4].

[4] CAPPELLETTI, loc. cit. p. 8.

Destacam nesse sentido que "*acesso à justiça, pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos*"[5].

O interesse pelo acesso a justiça levou a criação de três posições denominadas ondas renovatórias, quais sejam: assistência jurídica para os pobres; representação dos interesses difusos; e efetividade dos mecanismos de acesso à justiça[6].

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a primeira onda renovatória, iniciada em 1965, parte do pressuposto básico da proteção e assistência jurídica aos pobres tendo em vista que qualquer demanda ou litígio no plano jurídico requer recursos, entretanto, existiam aqueles que não poderiam arcar com este ônus financeiro o que criaria um óbice a tutela jurisdicional efetiva, dai a importância da criação e estruturação da Defensoria Pública na prestação gratuita a assistência judiciária.

Seguindo adiante, a segunda onda renovatória busca a tutela dos interesses coletivos, difusos e metaindividuais afastando-se do conceito e da proteção de direitos puramente individuais na busca da primazia da coletividade.

Por fim, a terceira onda renovatória determina que não basta ao Estado conferir ao cidadão o direito a ação sem garantir meios eficazes desse direito ser efetivo no plano jurídico, ou seja, parte de uma premissa de reforma interna do processo com enfoque no acesso à justiça e da representação na ordem jurídica.

Nessa toada, vários medidas tomadas em âmbito nacional referentes a Defensoria Pública tiveram influência direta das resoluções e demais documentos internacionais que precisam ser mencionadas separadamente.

Contudo, apesar de no plano teórico existirem inúmeros instrumentos fortificadores, sejam eles nacionais ou internacionais, sua plena eficácia e alcance mostram-se prejudicados em decorrência da analise empírica da estruturação da instituição Defensoria Pública em solo pátrio.

§1° - O PAPEL DA DEFENSORIA PÚBLICA NA PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

[5] Ibidem. p. 12.
[6] Ibidem. p. 31.

Antes de qualquer análise de cunho empírico, far-se-á necessário abordar os instrumentos teóricos, em especial no plano constitucional, de proteção de direitos humanos desempenhados pela Defensoria Pública.

Primeiramente será feita uma breve abordagem pré-Constituição de 1988 para, posteriormente, adentrar-se no mérito que pretende-se discutir com mais profundidade.

Será realizada também uma análise da influência dos mecanismos supramencionados na ordem interna no intuito de fortalecer a Defensoria Pública na defesa os direitos humanos e, em especial, das pessoas em condição de vulnerabilidade.

A – Breve análise da Defensoria Pública pré e pós promulgação da Constituição Federal de 1988.

Antes da promulgação da Carta Magna de 1988 era dever dos Estados prover a assistência judiciária, reconhecido como serviço público de competência administrativa dos entes políticos, contudo não havia disposição da forma como seria prestada deixando a critério de cada Estado a maneira de realizá-lo[7]. Ou seja, as constituições anteriores apenas traziam menção expressa à assistência judiciária, entretanto não havia qualquer referência ao órgão que devia prestá-la.

Nesse sentido, somente após a Constituição Federal de 1988 é que houve a criação de fato da Defensoria Pública sendo a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes um direito fundamental conforme ditames do inciso LXXIV do artigo 5° da Constituição Federal, que, inclusive, determinou a criação da instituição em todo território nacional.

Em 1994, a promulgação da Lei Complementar 80/94 veio organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional 80/2014, que alterou o artigo 134 da Constituição Federal, significativas mudanças foram incorporadas a instituição e precisam ser analisadas separadamente.

Urge destacar a forte influência de mecanismos de *soft law*, entendido em linhas gerais como resoluções e declarações internacionalmente aprovadas, e de instrumentos de

[7] LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Defensoria Pública. Salvador: Editora JusPODIVM, 2011. p. 72

hard law, ou seja, normas de direito internacional que versam sobre direitos humanos, no arcabouço jurídico nacional como veremos abaixo.

B - Emenda Constitucional 80/2014 e suas alterações na estrutura da Defensoria pública e a defesa de direitos fundamentais daqueles em situação de vulnerabilidade

A EC 80/2014, que teve como origem a chamada "PEC defensoria para todos", foi muito festejada, uma vez que, trouxe a reestruturação da Defensoria Publica, importantíssima para o Estado Democrático de Direito.

A primeira alteração importante que a emenda trouxe diz respeito à reestruturação do capitulo IV do titulo IV da Constituição Federal. Antes da emenda 80/2014 o capitulo era dividido em: *sessão I – Do Ministério Público; sessão II – da advocacia publica; sessão III – da advocacia e da defensoria publica.* Essa "sessão III", com o advento da EC 80/14, foi subdividida em: *sessão III – da advocacia; e sessão IV – da defensoria publica.*

Essa subdivisão teve como objetivo realçar a diferença entre a advocacia e a Defensoria Pública, ou seja, o advogado que presta atividades de caráter privado, e o defensor público, que presta atividade de caráter eminentemente público.

A segunda alteração importante trazida pela EC 80/2014 foi a alteração do caput do artigo 134 da Carta Magna, que trata da natureza e das incumbências da Defensoria Pública, pois, houve uma incorporação no texto constitucional do artigo 1° da Lei orgânica da defensoria Publica (Lei complementar 80/94) cuja redação é a seguinte:

> Art. 1° - A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Outra alteração relevante diz respeito à adição do §4° do artigo 134 da Constituição Federal onde, primeiramente, houve a constitucionalização dos princípios institucionais da Defensoria Pública, previstos na lei orgânica da Defensoria Pública no seu artigo 3°, quais sejam: unidade, indivisibilidade e independência funcional.

Vale mencionar que a inserção desses princípios fortalece a instituição, tal qual o ministério publico no artigo 127, §1° da Lei Maior, e que, sua origem se deu por meio da

recomendação da OEA em sua resolução 2.625 (XLI-0/11) e da disposição das demais resoluções subsequentes.

A segunda alteração proveniente da redação do parágrafo §4° do artigo 134 da Lei Maior, determina a aplicação à Defensoria Pública, no que couber, o disposto no art. 93 da CF, artigo esse que trata dos princípios e normas aplicáveis a magistratura. Portanto, serão aplicáveis à Defensoria Pública, v.g., a adoção de critérios objetivos na promoção da carreira, a realização de cursos oficiais de preparação, aplicação de normas claras de remoção, aposentadoria, dentre outros.

Entretanto, a crítica que se faz diz respeito a expressão "no que couber" que traz uma carga de subjetividade que certamente acarretará situações que deveriam ser resolvidas pelo poder judiciário.

A terceira alteração que veio com o novel §4° do artigo foi a determinação da aplicação, também no que couber, do artigo 96, II da Constituição de 1988, que trata da iniciativa dos tribunais para projetos de lei de matéria relativa ao poder judiciário, ou seja, a Defensoria passa a ter iniciativa para projetos de lei sobre alteração do número de seus membros, criação e extinção de cargos, remuneração de serviços auxiliares, fixação de subsídios de seus membros, criação e extinção de órgãos, o que visa assegurar sua autonomia como instituição democrática a nível constitucional. Em outra palavras, essa alteração foi muito importante uma vez que emendas constitucionais anteriores já tinham atribuído as Defensorias Públicas a autonomia financeira e orçamentária, a EC 45/04 , em relação as defensorias estaduais, e a EC 74/13 em relação a Defensoria Pública da União e Distrito Federal. Contudo, essas instituições federais não possuíam ainda a iniciativa para os projetos de lei que continuavam a cargo do Poder Executivo.

Mais uma vez importante destacar a influência das resoluções supramencionadas na ordem jurídica interna, ou seja, a preocupação do Estado Brasileiro em responder de maneira efetiva as recomendações da OEA e de assegurar a independência, autonomia funcional e técnica/orçamentária da Defensoria Pública.

A última alteração foi a adição do artigo 98 do ADCT que determinou que o número de defensores públicos na unidade jurisdicional deve ser proporcional a efetiva demanda de serviço e, também, à população e que num prazo máximo de oito anos, União,

D.F, Estados e Municípios contem com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais.

Importante ainda mencionar que após a EC 80/14, a Defensoria Pública passou a ter *status* de instituição permanente, tendo o rol de suas atribuições ampliados, especialmente no que diz respeito a zelar pela promoção dos direitos humanos, deixando para trás a função de mera prestadora de orientação jurídica e defensora dos necessitados.

Outro ponto importante a ser destacado, e que possui influência direta da segunda onda renovatória, diz respeito ao intenso debate que se criou a respeito da legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil púbica na tutela de direitos difusos, coletivos e metaindividuais. Esse impasse só foi solucionado após julgamento da ADIn 3.943/2015, onde por unanimidade foi reconhecida a legitimidade da Defensoria na defesa desses direitos, o que certamente, significa uma conquista de extrema importância para a sociedade bem como fortalece a instituição na defesa de direitos fundamentais.

Noutro norte, cabe a Defensoria Pública o dever de promoção do efetivo acesso a justiça a toda a sociedade e não apenas aos necessitados econômicos (art. 5°, inciso LXXIV da CF/88).

Nesse bojo, por obviedade, insere-se aqueles em situação de vulnerabilidade dada a fragilidade desses grupos na obtenção de tutela jurisdicional de seus direitos constitucionalmente previstos, em outros termos, devem ser atendidos, v.g., os vulneráveis culturais, organizacionais, sociais e etc., na busca de redução de desigualdades e integração de grupos vulneráveis a sociedade.

Segundo os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover[8], serão considerados socialmente vulneráveis, e consequentemente necessitados organizacionais, os usuários de serviços públicos, consumidores e todos aqueles que busquem melhorias, implementações ou mesmo contestar políticas públicas, no que diz respeito a saúde, meio ambiente, moradia ou, até mesmo, em questões referentes a direito penal eis que o acusado sempre encontra-se em situação de vulnerabilidade frente a denunciação Estatal.

[8] GRINOVER, Ada Pellegrini. Assistência Judiciária e Acesso à Justiça. In: _____. Novas Tendências do Direito Processual. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990, p. 246.

Em suma, não obstante a críticas, a EC 80/14 pode ser considerada um grande avanço para o fortalecimento da Defensoria Pública, tendo incorporado em seu texto diversos mecanismos internacionais de proteção, elevando a instituição a outro patamar eis que, mais que nunca, passa a ser fundamental ao Estado Democrático de Direito, e para a concretização do efetivo acesso à justiça, principalmente daqueles necessitados e em situação de vulnerabilidade.

§2° - MAPA DA DEFENSORIA PÚBLICA NO BRASIL: BARREIRAS AO ACESSO A JUSTIÇA EM SENTIDO AMPLO E EFETIVO.

Até o presente momento, a análise teórica quanto ao papel da Defensoria Pública na promoção dos direitos humanos das pessoas em situação de vulnerabilidade, mostrou-se mais que protegida, no plano internacional e incorporada pelo sistema jurídico interno. Contudo, a análise pragmática da situação da instituição no plano interno, exige reflexões dada sua importância na defesa de direitos humanos, e na efetivação do acesso à justiça.

Nesse sentido, a pesquisa mais recente no que tange a estrutura da Defensoria no Brasil, que teve os dados levantados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)[9] e pela ANADEP (Associação Nacional dos Defensores Públicos), por meio do Mapa da Defensoria Pública demonstra um cenário preocupante a cerca do tema, tendo em vista a fragilidade e a falta de estrutura da instituição bem como a falta de infraestrutura dada aos defensores públicos, tanto na atuação de suas comarcas como, inclusive, na atuação internacional, dada a falta de recursos o que resulta num prejuízo imensurável àqueles vítimas de violações de direitos humanos.

Para tanto, alguns dados apresentados pela pesquisa realizada pelo IPEA serão abordados, que não poderão ser, contudo, esgotados no presente trabalho, mas deixará evidente a situação real da Defensoria no território nacional.

A – A criação da Defensoria Pública em todos os Estados da federação e sua devida estruturação.

A primeira barreira encontrada no Brasil em relação ao efetivo acesso à justiça reside na própria criação da Defensoria Pública em alguns estados da federação, que

[9] http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria/defensoresnosestados

injustificadamente relutaram por muito tempo em cumprir os ditames constitucionais que prevêem a obrigatoriedade da criação das Defensorias Públicas.

A título de exemplo, nos Estados do Paraná e Santa Catarina, nos anos de 2011 e 2012 sequer existiam defensorias públicas onde, apesar de expressa determinação Constitucional, não haviam sido instituídas de fato, até imposição pelo STF aos estados de Santa Catarina e Paraná por meio das ADIN's 3.892 e 4.270 para a criação da instituição.

Já no Estado de Goiás, apesar da Defensoria Pública ter sido criada em 2005, prevendo a existência de 130 defensores públicos, apenas em 2010 veio publicar edital para a realização do primeiro concurso para provimento de 40 vagas para o cargo de Defensor Público.

No estado do Amapá a Defensoria Pública ainda não havia realizado nenhum concurso público, até o ano de 2013, sendo os serviços prestados por advogados contratados a título precário, por livre nomeação pelo governador do Estado, embora o Supremo Tribunal Federal tenha entendimento consolidado no sentido de que a criação da Defensoria Pública é medida que se impõe aos Estados e que os serviços devem necessariamente ser prestados por Defensores Públicos concursados, vedada a contratação a título precário de advogados para atuar na condição de Defensores Públicos (vale destacar o conteúdo da resolução AG/RES. 2714 (XLII-O/12) que rechaçou tal prática).

De acordo com esse panorama é fácil identificar a omissão dos Estados a cumprirem de maneira efetiva os preceitos constitucionalmente previstos e que certamente prejudica e muito aqueles que necessitam da atuação da Defensoria Pública na tutela de proteção e garantia de direitos humanos.

A segunda barreira encontrada para o efetivo acesso a justiça diz respeito à estruturação da Defensoria Pública, ou seja, não basta a criação de defensorias públicas caso não sejam dadas condições mínimas de trabalho relacionadas a contratação de servidores compatíveis com a demanda populacional (vale lembrar o texto do artigo 98 do ADCT supracitado), bem como a contratação de servidores, no intuito de se prestar de maneira efetiva assistência jurídica integral e gratuita[10].

[10] SOUZA, José Garcia de. A nova Lei 11.448/07, os escopos extrajudiciais do processo e a velha legitimidade da Defensoria Pública para as ações coletivas. In: SOUZA, José Garcia de (Coord.). A Defensoria Pública e os

No que pese as Defensorias Públicas já criadas, o número de Defensores Públicos em sua grande maioria é insuficiente para o atendimento à população, visto que, dos 8.489 cargos de Defensores Públicos, apenas 5.054 (59%) estão providos.

O estudo ainda demonstra a relação de cargos criados e os devidamente providos. Nesse sentido, o índice de exoneração de cargos, a pedido do defensor público era elevado em decorrência do baixo salário pago e às condições de trabalho aquém das expectativas, que estimulava o profissional a procurar outras carreiras jurídicas que ofertavam melhores condições.

Corrobora essa afirmação os dados referentes ao Estado de Minas Gerais onde foram providos 188 cargos entre os anos de 2010 e 2012, entretanto, essas nomeações serviram para repor o patamar de cargos providos de 2005, pois, de acordo com registros da Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP), a saída de 137 Defensores Públicos no período de 2006 a 2009 decorreu, principalmente, dos baixos salários pagos à época, muito inferiores aos das demais carreiras jurídicas, além de condições precárias de trabalho**.** Já os Estados com menor índice de provimento de cargos de defensores, apontado pela pesquisa, no país são Piauí (18,8%) e Amazonas (27,6%).

B – A presença da Defensoria Pública nas comarcas do território nacional e nas áreas com maior concentração de população-alvo.

Em 2009 o Ministério da Justiça elaborou o III Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil[11], revelando que apenas 41,09% das comarcas brasileiras eram atendidas pelos serviços das Defensorias. Ocorre que a pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça não levou em consideração os estados de Paraná, Santa Catarina, Amapá e Goiás, cujas Defensorias Públicas foram criadas após a realização do III Diagnóstico da Defensoria Pública pelo Ministério da Justiça, sendo assim, a nova pesquisa demonstrou um quadro alarmante: apenas 28% das comarcas brasileiras eram de fato atendidas por Defensorias Públicas.

---

processos coletivos: comemorando a Lei Federal 11.448, de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 228.

[11] BRASIL. Ministério da Justiça. III Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil. 2009a. Disponível em: <http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/III%20Diagn%C3%B3stico%20Defensoria%20P%C3%blica%20no%20Brasil.pdf>.

Outro dado relevante apresentado pelo estudo diz respeito às áreas de atuação das Defensorias Públicas, que se concentram na seara criminal, cível, família e execução penal.

O estudo apurou que há um número elevado de Defensores atuando cumulativamente em mais de uma área, o que resulta, consequentemente, na falta de especialização e sobrecarga de trabalho, condições essas que prejudicam o atendimento de qualidade a população necessitada.

Ainda no que tange a atuação, talvez o dado mais significativo, e digno de atenção, mostra a atuação apenas incipiente no que atine à proteção de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, direitos do idoso, tutela dos direitos dos deficientes, bem como a atuação perante a segunda instância e tribunais superiores.

Depreende-se dessa afirmação duas constatações de extrema relevância: primeiramente no que tange a atuação da Defensoria Pública apenas incipiente exatamente em casos em que os grupos são considerados vulneráveis, como mulheres, idosos e deficientes. Justo aqueles que encontram maior fragilidade, maior dificuldade de tutela e proteção de direitos humanos são justamente aqueles que tem a atuação da Defensoria mitigada e aquém do necessário. Isso somado ao fato da presença insuficiente da instituição nas comarcas brasileiras e a falta de defensores públicos na atuação da assistência jurídica gratuita.

Essa situação demonstra, apesar de toda a proteção internacional e nacional, na tentativa de fortalecer a Defensoria, a fragilidade da instituição e na mitigação do acesso à justiça de pessoas em condição de vulnerabilidade, ou seja, um grave desrespeito a Constituição Federal de 1988, aos mecanismos internacionais e aos direitos humanos.

Segundo, importante mencionar o desrespeito à resolução AG/RES. 2821 (XLIV-O/14) (e aquilo que preceitua a terceira onda renovatória do acesso à justiça) que determina que o acesso à justiça não se consagra de forma efetiva com o ingresso das pessoas em condição de vulnerabilidade na instância judicial mas sim concretiza-se ao longo de todo o processo. Ora, se a atuação perante a segunda instância e tribunais superiores não é suficiente, o acesso à justiça e a tutela de direitos humanos é prejudicada, o que deve ser rechaçado a todo custo.

Por fim, os dados mostram que há evidente ausência da Defensoria em mais de 70% das comarcas brasileiras, principalmente em razão da falta de profissionais.

Essa ausência é mais significativa em comarcas com população inferior a 100 mil habitantes, já que se buscou conciliar o vetor população x necessidade (entendida nesse contexto como carência ou renda mensal, estipulada em três salários mínimos mensais).

Levando esses números em consideração, 78,7% das comarcas com mais de 100.000 habitantes que possuem renda mensal de até três salários-mínimos recebem algum tipo de atendimento da Defensoria Pública.

Esse parâmetro foi determinado em virtude de serem de fácil aferição já que são dados colhidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Porém, há problemas na escolha desse parâmetro, primeiramente em razão de não ser esse o único indicador de vulnerabilidade (como já foi explicado supra), bem como não encontra qualquer respaldo legal ou doutrinário.

A crítica que se faz a esse parâmetro utilizado segue de algumas premissas básicas. Primeiramente, não há legislação que estabeleça qualquer limite remuneratório, assegurando que pessoas com renda maior possam utilizar os serviços da Defensoria Pública, devendo sempre ser verificada a necessidade.

Segundo que, o parâmetro em que se prioriza centro com população superior a 100.000 mil habitantes não seria o ideal para a efetivação do acesso a justiça, principalmente daqueles mais vulneráveis, ou seja, não é crível sustentar que se resolve de modo efetivo o problema de pessoas em condição de vulnerabilidade atuando somente em centros urbanos com população superior a 100 mil habitantes, já que não há qualquer disposição constitucional nesse sentido.

Os parâmetros a serem utilizados, devem ser aqueles que demonstrem os números totais da presença da Defensoria no território brasileiro, ou seja, aqueles que apontam a falta de defensores públicos em 72% das comarcas e que apresenta um déficit total de 10.578 Defensores Públicos, sendo os Estados com maior carência desses profissionais, São Paulo com déficit de 2.471, Minas Gerais com 1.066, Bahia com 1.015 e Paraná com 834.

CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, tem-se que o caso em comento, com todas suas nuances, é, pois, emblemático em muitos sentidos. Apesar dos inúmeros mecanismos no plano teórico, em âmbito internacional e nacional que visam o fortalecimento da Defensoria Pública, tendo a

Constituição outorgando-lhe, independência, autonomia funcional e financeira e reconhecendo a importância da instituição como imprescindível na tutela dos direitos humanos e como meio efetivo na concreção do acesso à justiça a todos aqueles necessitados, em especial aqueles em condição de vulnerabilidade, a pesquisa empírica demonstrou barreiras que impedem o acesso à justiça daqueles que tem direitos humanos desrespeitados, violados ou que encontrem dificuldades em efetivá-los.

A pesquisa realizada pelo IPEA em conjunto com o INADEP deixou claro que grande parte da população brasileira em situação de vulnerabilidade não desfruta a contento do serviço de assistência jurídica que deveria ser prestado pela Defensoria Pública, já que 72% das comarcas brasileiras não contam com à atuação da Defensoria Públicas em seu território.

Portanto, a falta de materialização normativa impede a transformação da realidade social a qual o Estado Brasileiro se insere já que, em termos práticos, a ausência de realização de direitos humanos e dos preceitos constitucionais, onde prevalece apenas o texto legal sem se preocupar com a sua concreção efetiva, tem pouco significado para a transformação do Estado Brasileiro e gera um cenário de exclusão daqueles que mais necessitam de prestações positivas do Estado.

BIBLIOGRAFIA

AG/RES. 2.656 (XLI-0/11) da OEA

AG/RES. 2.714 (XLII-O/12) da OEA

AG/RES. 2801 (XLIII-O/13) da OEA

AG/RES. 2.821 (XLIV-O/14) da OEA

ALVES, Cleber Francisco. Defensoria Pública e educação em direitos humanos. In: SOUSA, *José Augusto Garcia de. (coord.). Uma nova Defensoria Pública pede passagem: reflexões sobre a lei complementar 132/09*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

BRASIL. Mapa da Defensoria Pública no Brasil. Disponível em: <https://www.anadep.org.br/wtksite/mapa_da_defensoria_publica_no_brasil_impresso_.pdf>

BRASIL. Ministério da Justiça. III Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil. 2009a. Disponível em: <http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/III%20Diagn%C3%B3stico%20Defensoria%20P%C3%blica%20no%20Brasil.pdf>.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

GALLI, Maria Beatriz; DULITZKY, Ariel E. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o seu papel central no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. *In*: GOMES, Luiz Flávio; PIOVESAN, Flávia. (coord.). *O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Assistência Judiciária e Acesso à Justiça. In: _____. Novas Tendências do Direito Processual. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990.

GRINOVER, Ada Pellegrini. Legitimidade da Defensoria Pública para ação civil pública. In: CLÉVE, Clémerson Merlin; BARROSO, Luís Roberto. *Direito constitucional: organização dos poderes da República*. Coleção doutrinas essenciais; v. 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Defensoria Pública. Salvador: Editora JusPODIVM, 2011.

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direitos humanos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 2015.

NOGUEIRA, Vânia Márcia Damasceno. *A nova Defensoria Pública e o direito fundamental de acesso à justiça em uma neo-hermenêutica da hipossuficiência*. In: Revista Síntese Direito Civil e Processual Civil. v. 12, n. 70, mar./abr. 2011.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A Legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ações civis públicas: primeiras impressões e questões controvertidas. In:*A Defensoria Pública e os Processos Coletivos: Comemorando a Lei Federal 11.448, de 15 de janeiro de 2007.* Rio de Janeiro: Editora Lumen Juri, 2008.

RIBEIRO, Roberta Solis. Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos e Defensoria Pública. In: SOUSA, José Augusto Garcia de (coord.). A Defensoria Pública e os Processos Coletivos: comemorando a Lei Federal 11.448, de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008.

SÉGUIN, Elida. *Minorias e grupos vulneráveis:* uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

SOUZA, José Garcia de. A nova Lei 11.448/07, os escopos extrajudiciais do processo e a velha legitimidade da Defensoria Pública para as ações coletivas. In: SOUZA, José Garcia de (Coord.). A Defensoria Pública e os processos coletivos: comemorando a Lei Federal 11.448, de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. O sistema interamericano de direitos humanos no limiar do novo século: recomendações para o fortalecimento de seu mecanismo de proteção. In: GOMES, Luiz Flávio; PIOVESAN, Flávia. (coord*.). O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro.* São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.